



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 23 10A 120.

AUTO INTERLOCUTORIO No. 102.

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-00023-00
DEMANDANTE:	EDYTH ESCOBAR CHAVARRO Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL
ASUNTO	DEVUELVE A JUZGADO POR COMPETENCIA

La parte actora instauró medio de control de Reparación Directa, en la cual pretende que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL.

Respecto a la estimación de la cuantía, el Consejo de Estado¹ ha recordado que la fijación de los perjuicios causados tiene como finalidad determinar quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Sobre el particular se ha expresado que:

“Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo tanto no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía de las pretensiones formuladas por cada uno de ellos”². (subrayas por fuera de texto).

Al momento de estudiar la competencia funcional, se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones de aquellos que se consideran lesionados, para así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El numeral 6 del artículo 155 del CPACA indica:

“Art. 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.
Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

6°. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

El artículo 157 del CPACA establece:

“Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuesto, tasas, contribuciones y sanciones.

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia 19 de febrero de 2019, Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00197-00(62962).

² Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) en auto de 2 de mayo de 2016.

1

Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.** (...)

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella". (Subrayas y negrillas por fuera de texto)

En providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, C.P. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, del 29 de marzo de 2019, radicación número: 47001-23-31-000-2016-00005-01(63077) se reiteró al respecto:

"Con la normatividad anterior y la posición jurisprudencial de esta Sección³, quedó establecido que la cuantía de un proceso se determina por el valor de la multa o de los perjuicios causados, excluidos los perjuicios inmateriales, que en el caso de acumulación de pretensiones, la cuantía se determina a partir de la mayor pretensión individualmente considerada y que se estimará razonadamente la misma, lo que conlleva la existencia de coherencia entre las pretensiones y la disposición del artículo 157 del CPACA, incluyendo los casos atribuidos por la responsabilidad extracontractual de la acción u omisión de los agentes judiciales⁴, lo anterior, en los términos establecidos por el numeral 6 del artículo 152 del CPACA".

De conformidad con lo anterior, para efectos de determinar la competencia de los Tribunales Administrativos por razón del factor objetivo-cuantía, es preciso tener en cuenta que la pretensión mayor invocada en la demanda, de manera individualizada, y esta debe exceder de los 500 SMLMV, es decir, superar los **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$414.058.000)** conforme al salario mínimo actual vigente a la fecha de presentación de la demanda, sin que en tal sumatoria se incluya la estimación por perjuicios morales, salvo que éstos sean los únicos que se reclamen.

En el presente caso, mediante auto interlocutorio nro. 650 del 13 de diciembre de 2019⁵, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga remitió el expediente a esta Corporación, por considerar que, según la estimación razonada de la cuantía estimada por la parte demandante, esta supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, al revisar la demanda, se puede observar que, en la estimación de la cuantía efectuada por la parte demandante⁶, se realiza la sumatoria de las pretensiones tendientes al reconocimiento de una indemnización por los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante de todos los demandantes, cuando lo correcto es determinar la cuantía a partir de la mayor pretensión individualmente considerada.

En consecuencia, la pretensión mayor asciende a la suma de \$106.826.964⁷; valor que corresponde a la indemnización por los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, que reclama cada uno de los demandantes y que resulta inferior a los 500 SMLMV, por lo que debe darse aplicación al numeral 6 del artículo 155 del CPACA y la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera. Auto de 17 de octubre de 2013. Exp. 45679.

⁴ Teniendo como tales los derivados de la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

⁵ Folios 132-133.

⁶ Folios 19-20.

⁷ Folios 11-12.

RADICACIÓN : 2020-00023-00
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Demandante : EDYTH ESCOBAR CHAVARRO Y OTROS
Demandado : NACIÓN – RAMA JUDICIAL



Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168⁸ del C.P.A.C.A. se ordenará devolver el expediente por competencia al Juzgado Segundo Administrativo de Buga, quien deberá observar el inciso tercero del artículo 139⁹ del CGP aplicable por remisión expresa del artículo 306¹⁰ del CPACA.

En consecuencia; se,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA en razón de la cuantía, para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: DEVOLVER las presentes diligencias, por competencia en razón a la cuantía, al Juez Segundo Administrativo de Buga.

SEGUNDO: Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el sistema Justicia Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OMAR EDGAR BORJA SOTO
Magistrado

⁸ ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión

⁹ ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada. La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. (subrayas fuera de texto).

¹⁰ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Proyectó: ACH
VoBo Secretario: